



Consejo de Seguridad

Distr.
GENERAL

S/1995/631
28 de julio de 1995
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

CARTA DE FECHA 28 DE JULIO DE 1995 DIRIGIDA AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL

Tengo el honor de referirme a la propuesta de creación de una comisión internacional de investigación en Burundi, de la cual se hizo mención en fecha más reciente en la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 29 de marzo de 1995 (S/PRST/1995/13).

Al momento de formularse la declaración, la Secretaría ya había estudiado diversas opciones para la creación de una comisión de dicha índole. Todas ellas entrañaban considerables dificultades. Por consiguiente, decidí investigar la posibilidad de proponer al Gobierno de Burundi la creación de una comisión de la verdad, análoga a la que constituyó un elemento tan importante en el proceso de paz en El Salvador. Conforme a ello, recabé los servicios del Dr. Pedro Nikken, quien desempeñó una función central en la concepción de la comisión de El Salvador (y que posteriormente se desempeñó como el Experto Independiente para El Salvador de la Comisión de Derechos Humanos), y lo envié en misión a Burundi para que examinara con el Gobierno la posibilidad de recurrir a esta opción para abocarse al problema de la impunidad en Burundi.

Ahora he recibido el informe del Dr. Nikken, del cual se adjunta una copia. Las conclusiones y recomendaciones del Dr. Nikken figuran en los párrafos 63 a 68. Pueden resumirse de la forma siguiente:

a) Ni una comisión de la verdad basada en el modelo salvadoreño, ni una comisión judicial de averiguación internacional cuyo mandato esté limitado a cuestiones de orden puramente judicial sería una respuesta adecuada a la necesidad de poner cese a la impunidad en Burundi;

b) Sin embargo, una comisión judicial de averiguación internacional podría ser viable y útil si tuviera un mandato tal que le otorgara facultades que aseguraran que sus conclusiones y recomendaciones fuesen efectivamente ejecutadas y alcanzasen el objetivo de enjuiciar y sancionar a los responsables del asesinato del Presidente de Burundi el 21 de octubre de 1993, de las matanzas que se desencadenaron y de otros actos graves de violencia y los crímenes con connotación política cometidos desde octubre de 1993;

c) El mandato de la comisión internacional debería estipular no sólo que ésta realice una investigación judicial, sino que haga recomendaciones de carácter institucional, sean de orden legal, político o administrativo;

d) La comisión requeriría de la cooperación de las autoridades burundianas, a las que, en particular, debería pedírseles que se comprometieran a poner en práctica sus recomendaciones;

e) La comisión debería ser establecida por resolución del Consejo de Seguridad;

f) El cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones de la comisión debería estar sujeto a la verificación de las Naciones Unidas.

El informe del Dr. Nikken proporciona valiosas aclaraciones sobre las medidas que puede adoptar la comunidad internacional para responder a la decisión de las partes burundianas que figura en el Pacto de Gobierno, de 10 de septiembre de 1994, de recabar el establecimiento de una comisión de investigación judicial internacional. Conuerdo con la mayoría de las conclusiones del Dr. Nikken.

Conforme a ello, recomiendo que el Consejo de Seguridad ahora apruebe a la brevedad posible una resolución por la que se establezca una comisión de dicha índole, con un triple mandato, como se indica a continuación:

a) Determinar los hechos relativos al asesinato del Presidente de Burundi el 21 de octubre de 1993, las matanzas que se desencadenaron y otros actos graves de violencia y crímenes con connotación política cometidos entre esa fecha y la fecha en que se apruebe la resolución del Consejo de Seguridad;

b) Recomendar modalidades para el enjuiciamiento y la sanción de las personas que, según lo establezca la comisión, sean responsables de los delitos que ésta investigue;

c) Recomendar medidas de orden legal, político o administrativo, en particular medidas que exijan una reforma administrativa o constitucional, para impedir cualquier repetición de hechos parecidos a los que investigue la comisión y, en general, erradicar la impunidad en Burundi.

Propongo además que la comisión esté integrada por tres miembros nombrados por el Secretario General, quien informaría al Consejo de Seguridad de su decisión a este respecto, y que la Secretaría de las Naciones Unidas le prestase los servicios de apoyo necesarios.

Del informe del Dr. Nikken se desprende con meridiana claridad que la plena cooperación de las autoridades burundianas será condición necesaria para que la labor de la comisión dé frutos. Por consiguiente, cuando el Consejo adopte la decisión de crear la comisión, quizás desee dejar en claro que espera que las autoridades burundianas le presten la cooperación necesaria, la cual, basándose en el informe del Dr. Nikken, puede resumirse de la forma siguiente:

a) Adopción por parte del Gobierno de cualesquiera medidas necesarias para que la comisión y el personal a su cargo desempeñen sus funciones en todo el territorio nacional con libertad, independencia y seguridad plenas;

b) Prestación por parte del Gobierno de toda la información que obre en su poder y que necesite la comisión para ejecutar su mandato y libertad de acceso a cualquier archivo oficial;

c) Libertad para que la comisión acopie toda información que considere pertinente y utilice todas las fuentes de información que estime útiles y confiables;

d) Libertad para que la comisión entreviste, privadamente, a cualquier persona que estime necesario;

e) Libertad para que la comisión puede visitar cualquier establecimiento o lugar sin previo aviso;

f) Una garantía del Gobierno de pleno respeto a la integridad, seguridad y libertad de los testigos, expertos y cualesquiera otras personas que ayuden a la comisión en su labor.

En el informe del Dr. Nikken también se analizan las medidas que serán necesarias para poner en práctica las recomendaciones de la comisión. El Dr. Nikken sugiere que se pida al Gobierno que se comprometa de antemano a aplicar esas recomendaciones y, en particular, a adoptar medidas para el enjuiciamiento efectivo de las personas que, según lo establezca la comisión, sean responsables de los delitos que investigue; instituir las reformas jurídicas, políticas o administrativas que se recomienden; promover la aprobación de la legislación que sea necesaria, y aceptar la verificación por parte de las Naciones Unidas de la aplicación de la recomendaciones de la comisión.

Si bien convengo con el Dr. Nikken en que dichos compromisos por parte del Gobierno mejorarían las perspectivas de que la comisión consiga ayudar al Gobierno y al pueblo de Burundi a dejar atrás los trágicos acontecimientos de los años recientes y poner fin a la impunidad en su país, estimo que tratar de recabar dichos compromisos ahora retardaría aún más la creación de la comisión de investigación judicial internacional. Sin embargo, el Consejo de Seguridad quizás desee invitar a la comisión a que presente un informe preliminar, en el momento en que ésta decida, que se abocaría en particular a la cuestión de cómo ha de enjuiciarse a las personas que, según establezca la comisión, sean responsables de matanzas y otros crímenes políticos y, en particular, si su enjuiciamiento debe confiarse al sistema judicial burundiano o a un tribunal internacional.

Agradecería que señalara este asunto a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Boutros BOUTROS-GHALI

/...

ANEXO

Informe del Enviado Especial para examinar la viabilidad
de una comisión de la verdad en Burundi o de una comisión
judicial de averiguación como alternativa de una comisión
de la verdad

[Original: español]

I. INTRODUCCIÓN

1. Burundi atraviesa una larga y profunda crisis desde la tentativa de golpe de Estado y el asesinato del Presidente Melchior Ndadaye el 21 de octubre de 1993 y las masacres que se desencadenaron inmediatamente después. De hecho, la violencia, la formación de milicias, las ejecuciones sumarias y toda suerte de abusos contra la dignidad humana no han cesado. Decenas de miles de personas han sido asesinadas por los más diversos medios y la atrocidad ha sido llevada a menudo hasta el paroxismo.

2. Uno de los componentes de ese escenario es la impunidad de la que han gozado los autores, instigadores y encubridores de esos crímenes y que es, a su vez, invocada como pretexto o justificación para obtener justicia por medio de la venganza y la violencia privada organizada por las milicias. En realidad, el crimen sin castigo es la regla en Burundi. En el presente, hay tribunales prácticamente paralizados. Por lo demás, sectores importantes de la sociedad desconfían de la imparcialidad del sistema judicial.

3. Se puede percibir una aguda demanda para poner fin a la impunidad. En varias oportunidades ha sido sugerida la creación de una comisión de averiguación judicial internacional. Así, en el informe presentado al Secretario General por la Misión Preparatoria de determinación de los hechos enviada a Burundi integrada por los embajadores Martin Huslid y Siméon Aké, se expresó lo siguiente:

"Una propuesta que merece ser examinada atentamente, tras la misión preparatoria que acaba de finalizar su investigación política, consiste en estudiar la posibilidad de enviar, con el acuerdo del Gobierno, una misión centrada en los aspectos judiciales a fin de determinar con mayor precisión las responsabilidades en los acontecimientos de octubre de 1993 e identificar a los culpables para hacerlos comparecer ante la justicia" (S/1995/157, anexo, párr. 164).

4. En el mismo sentido, el informe de la Misión del Consejo de Seguridad a Burundi del 28 de febrero de 1995 recomendó que una comisión internacional de investigación debería ser establecida en Burundi tan pronto como resultara posible (S/1995/163, anexo, párr. 21). Por su parte, el Presidente del Consejo de Seguridad, en su alocución del 9 de marzo de 1995, subrayó la función que podía cumplir semejante comisión en la investigación de la tentativa de golpe de Estado del 21 de octubre de 1993 y de las masacres que lo siguieron (véase S/PRST/1995/10).

/...

5. En el plano interno, el 10 de septiembre de 1994, las Fuerzas de Cambio Democrático (partidos de la mayoría) y los partidos políticos de la oposición firmaron en Burundi el Pacto de Gobierno, concebido como un instrumento para la gestión de la crisis, que comporta entre otras cosas, un sistema de poder compartido. Ahora bien, el artículo 36 del Pacto contempló expresamente el establecimiento de tal misión:

"Artículo 36. Se solicita recurrir, en un plazo de 30 días, a una misión de investigación judicial internacional, compuesta por personalidades competentes y neutrales, para investigar el golpe de Estado del 21 de octubre de 1993, lo que los interlocutores políticos han convenido en denominar genocidio sin perjuicio del resultado de las investigaciones nacionales e internacionales independientes, y los diversos crímenes políticos perpetrados desde octubre de 1993" (véase A/50/94-S/1995/190, anexo).

6. El Sr. Sylvestre Ntibantunganya, Presidente de la República de Burundi, se dirigió al Secretario General, por nota del 24 de enero de 1995, solicitando el establecimiento de la comisión judicial prevista en la citada disposición. El Secretario General respondió al Presidente el 9 de febrero siguiente, con los comentarios apropiados. La mencionada nota del Presidente al Secretario General despertó una polémica al interior del país, tanto por razones de procedimiento como por motivos de fondo. En cuanto a las primeras, los partidos políticos de oposición reclamaron no haber sido consultados sobre dicha nota, consulta que debió tener lugar en los términos del Pacto de Gobierno. Por lo que respecta al fondo, tampoco estuvo la oposición de acuerdo con el mandato sugerido por el Presidente y reclamó que el mismo debería ser también el objeto de un acuerdo político. Esta polémica llevó el asunto a un estado de estancamiento, en el cual permanece todavía.

7. Una de las opciones que podría contribuir a poner fin a ese estancamiento era considerar la posibilidad de instituir en Burundi, a breve plazo, una "comisión de la verdad" tal como fue establecida en El Salvador. El Secretario General tuvo a bien confiarme la misión de examinar si las entidades nacionales apropiadas en Burundi están preparadas para establecer tal comisión de la verdad. En el curso de mi visita a Burundi recibí el encargo adicional de estudiar la viabilidad de una comisión judicial de averiguación como alternativa de una comisión de la verdad.

8. Para el cumplimiento de la misión, realicé una visita preliminar a Bujumbura entre los días 28 de junio y 9 de julio de 1995, durante la cual me entrevisté con las personas que aparecen en el apéndice del presente informe. La mayor parte de ellas fueron sugeridas por el Sr. Ahemedou Ould Abdallah, Representante Especial del Secretario General, quien me prestó, junto con su equipo, la asistencia necesaria.

9. Con esos antecedentes, el presente informe intentará determinar, por una parte, si las entidades nacionales apropiadas en Burundi están preparadas para instituir una comisión de la verdad, tal como fue establecida en El Salvador; y por otra parte, si una comisión judicial de averiguación podría ser una alternativa de la comisión de la verdad.

10. Esto comporta el examen de dos grupos de interrogantes. El primero se refiere a la viabilidad y utilidad de una u otra comisión. El segundo presupone que, así sea de manera precaria, al menos una de ellas es viable o necesaria, pues se refiere a los términos de referencia que, en todo caso, deberían estar presentes en la misma.

II. LA VIABILIDAD DE UNA COMISIÓN DE AVERIGUACIÓN

11. La situación actual del país, y las perspectivas que pueden anticiparse a corto plazo, plantean varios dilemas respecto de la viabilidad de una comisión de averiguación en Burundi, cualquiera sea la denominación o naturaleza que ella tenga. El primero de ellos se refiere a la utilidad real y a la necesidad del establecimiento de tal comisión, así como a los riesgos que comporta crearla o abstenerse de hacerlo. El segundo toca directamente a la naturaleza de la comisión, vale decir, es el dilema entre una "comisión de la verdad" y una "comisión de averiguación judicial internacional". El tercero se relaciona con el procedimiento que eventualmente habría que emplear para establecer la comisión. Los tres asuntos serán abordados sucesivamente.

A. El primer dilema: la utilidad y necesidad de la comisión en el contexto social y político actual

12. Como ya se ha comentado y es notorio, la situación política es extremadamente frágil e inestable. El Pacto de Gobierno del 10 de septiembre de 1994 estableció un sistema de poder compartido, con el objeto de ganar estabilidad y seguridad en la conducción del país. Sin embargo, ambos objetivos parecen alejarse. La polarización se agudiza cada día. La violencia es un hecho continuo y es notorio el peligro de que se generalice aún más.

13. Este escenario marca una diferencia importante con el existente en El Salvador cuando se estableció la Comisión de la Verdad. Lo mismo puede decirse respecto de la Comisión Nacional para la Verdad y la Justicia, en Haití; de la Promotion of National Unity and Reconciliation Commission de Sudáfrica; y, en el caso de las negociaciones todavía en curso en Guatemala, de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. En todos esos casos, la respectiva comisión ha sido concebida como una pieza de un proyecto mucho más amplio y ambicioso para el porvenir del país. Esas comisiones han estado acompañadas por el compromiso y la voluntad política de poner fin a un pasado donde la violencia se había impuesto por encima de los valores democráticos y el respeto a la dignidad humana. Las investigaciones sobre ese pasado se han inscrito dentro de un proyecto histórico de democratización, paz y pleno respeto por los derechos humanos. Más aún, en los casos de El Salvador y de Guatemala, el inicio de los trabajos de las respectivas comisiones fue condicionado a la conclusión de las negociaciones de paz y a la puesta en marcha de la ejecución de los acuerdos políticos alcanzados en dichas negociaciones.

14. Se trata, pues, de situaciones en las que fue trazada una frontera histórica entre un pasado a ser investigado y un futuro a partir del cual se puso en práctica un mecanismo para investigar aquel pasado. Esa frontera

histórica marcaba el límite final de la competencia ratione temporis de la comisión. En ese contexto, el efecto de los trabajos de las respectivas comisiones no se agotaba en el combate contra la impunidad que había cubierto numerosos crímenes y hechos de violencia en la era precedente, sino que también perseguía estimular la irreversibilidad de los cambios y no regresar jamás al escenario criminal puesto al descubierto por la comisión.

15. En Burundi, en cambio, cualquiera sea la comisión que llegue a crearse, sería un mecanismo aislado, carente de proyectos para el porvenir del país. El "debate nacional", que sería el instrumento para la búsqueda de soluciones globales para el futuro, está todavía en estado embrionario. Por consiguiente, la comisión tendría que trabajar dentro de un escenario de violencia continuada donde, además, el odio, el miedo y una polarización extrema cierran el paso a toda forma de esperanza y prevalecen sobre ella.

16. Es así que, a menos que se aceleren acciones dirigidas a buscar soluciones globales para la crisis nacional burundiana, los efectos de los trabajos de la comisión que se aspira establecer se limitarían, en principio, a poner cese a la impunidad y lograr la penalización judicial de los responsables por los crímenes. Es esta meta, por lo demás, una demanda unánime, tanto del Gobierno como de la oposición.

17. Este escenario comporta riesgos graves. Como ya se ha dicho, el aparato judicial es débil y se pueden percibir signos de desconfianza hacia su imparcialidad. A esto se agrega que algunos de los delitos que han de investigarse caerían dentro de la competencia de la jurisdicción militar y sus presuntos autores sólo podrían ser juzgados por tribunales militares.

18. Podría entonces ocurrir que los trabajos de la comisión sirvieran para esclarecer, incluso plenamente, los crímenes sometidos a su investigación, pero que la justicia burundiana no castigase a los criminales o los castigase siguiendo criterios que algún sector de la sociedad perciba como discriminatorios. Tal resultado podría ser catastrófico. Una "verdad" objetivamente establecida, pero carente de consecuencias y de esperanzas, es extremadamente peligrosa en el contexto actual del país. Se estimularía el sentimiento de impunidad de quienes escaparan a la acción de la justicia lo que, de algún modo, los invitaría a la reincidencia. Por otra parte, la frustración, la pretendida invocación de la venganza como único medio de obtener justicia y los odios ya existentes podrían exacerbarse y la violencia podría agudizarse más allá de todo límite.

19. Se trata, pues, de una materia que, por su extrema sensibilidad, reviste la mayor importancia. El establecimiento de una comisión internacional en Burundi, cualquiera sea su naturaleza o denominación, con la finalidad de esclarecer los graves hechos que allí han ocurrido, debe estar acompañada de las previsiones y medidas apropiadas, en la medida de lo posible, para evitar semejante desenlace.

20. Es preciso imaginar cuáles podrían ser esas previsiones para incluirlas en los términos de referencia de una eventual comisión. Esto, porque, a pesar de los riesgos, el establecimiento de tal comisión, dentro de un marco adecuado, parece útil, necesario y hasta urgente. Primero, porque la comisión es un medio apropiado del cual podrían disponer los sectores moderados para intentar contener a los extremistas y, en general, a quienes proclaman la vendetta como

medio para hacer justicia, o, al menos, para limitar o reducir el auditorio al que éstos dirigen su mensaje de odio y violencia. Segundo, porque a pesar de los riesgos que comporta, dentro de un marco adecuado la comisión podría ser verdaderamente el punto de partida para poner cese a la impunidad que prevalece en el país. Tercero, porque la comisión prevista en el artículo 36 del Pacto de Gobierno fue una condición sine qua non de ese acuerdo político. Por último, porque se trata del único mecanismo del Pacto de Gobierno en el cual la comunidad internacional ha sido llamada a cumplir una función y sería muy difícil comprender que, en las circunstancias dramáticas que vive este país, ella no hiciera el máximo esfuerzo posible para satisfacer ese cometido, en condiciones razonables. Conviene entonces abordar ahora el segundo dilema: la naturaleza y denominación de la comisión.

B. El segundo dilema: la naturaleza y denominación de la comisión

21. La misión que se me encomendó fue la de determinar, por una parte, si las entidades nacionales apropiadas en Burundi están preparadas para instituir una comisión de la verdad, tal como fue establecida en El Salvador; y por otra parte, si una comisión judicial de averiguación podría ser una alternativa de la comisión de la verdad. Después de pasar revista a la viabilidad y eficacia de ambas opciones, se examinará la posibilidad de proponer soluciones para los problemas que se han detectado.

1. Una comisión de la verdad

22. Las consultas revelaron reservas y hasta desconfianza frente a la eventual creación de una comisión de la verdad. Pude notar numerosos prejuicios frente a una entidad con esa denominación. En primer lugar, porque es vista como un intento por sustituir lo que ya ha sido objeto de un acuerdo político interno, en particular a la "misión de investigación judicial internacional" prevista en el artículo 36 del Pacto de Gobierno, que se ha citado supra. En segundo lugar, porque existen dudas, mal fundadas en mi opinión, sobre la eficacia del mecanismo llamado "comisión de la verdad". Se piensa que ese tipo de comisión sólo está facultada para relatar los hechos, pero no para revelar la identidad de los responsables, quienes continuarían gozando de impunidad. Algunos se imaginan, además, que la idea de una comisión de la verdad está necesariamente ligada con una amnistía. Se trata de una verdadera mistificación, que parece muy difícil de contrarrestar.

23. En ese contexto, cabía ante todo plantearse si las resistencias estaban referidas a la denominación del mecanismo más que al mecanismo en sí. No se trataba de librar una batalla por un nombre sino más bien de determinar si las atribuciones de la experiencia salvadoreña podían adaptarse a la situación y a las necesidades presentes en Burundi. Si el problema se limitaba tan sólo a la denominación, no se trataría de un obstáculo demasiado grave y el fondo del mecanismo podría preservarse. Es evidente, en efecto, que si se quiere sacar a la luz una "verdad" que se desconoce, es necesario hacer una "averiguación" o "investigación". No sería apropiado, en consecuencia, concluir a priori que existen contradicciones insalvables entre la Comisión de la Verdad de El Salvador y una comisión judicial de averiguación internacional. Por el

/...

contrario, antes de llegar a conclusiones definitivas cabía plantearse si ambas proposiciones podrían reducirse a una.

24. Para ese fin era necesario, ante todo, separar y analizar los componentes de la Comisión de la Verdad establecida en El Salvador, para determinar si ellos podrían ser también los términos de referencia de la comisión judicial de averiguación internacional concebida en el Pacto de Gobierno de Burundi.

25. A este propósito, los elementos relevantes presentes en la Comisión de la Verdad de El Salvador, pueden resumirse como sigue:

a) Un acuerdo político convenido entre contrapartes nacionales, mediante el cual se estableció la Comisión, se definió el alcance de su mandato y, en general, se fijaron sus términos de referencia;

b) Una comisión internacional, integrada por tres personas designadas por el Secretario General de las Naciones Unidas;

c) Una averiguación destinada a esclarecer graves hechos de violencia ocurridos durante la guerra civil habida en ese país desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclamaba con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad. El resultado de esta averiguación comprendió la identificación individual, por sus nombres, de los autores, instigadores o encubridores de tales hechos. Fue un trabajo hecho celosamente, con el apoyo de un equipo de especialistas y con los medios apropiados para esclarecer los hechos investigados. Sin embargo, para preservar la seguridad de los testigos la Comisión se abstuvo, en general, de publicar las fuentes de información que cimentaron su convicción sobre los resultados de la investigación;

d) Un mandato que otorgó competencia a la Comisión para hacer recomendaciones sobre las disposiciones de orden legal, político o administrativo que pudieran colegirse de los resultados de la averiguación. Dichas recomendaciones podían incluir medidas destinadas a prevenir la repetición de tales hechos, así como iniciativas orientadas hacia la reconciliación nacional. Es decir, la Comisión estaba formalmente investida del poder de hacer recomendaciones en el ámbito legal, lo que comprendía, sin ninguna duda, la posibilidad de requerir que los responsables de los hechos esclarecidos por ella y descritos en sus informes fueran juzgados y sancionados por tales crímenes. De hecho, la Comisión estatuyó explícitamente que:

"Entre las consecuencias directas del esclarecimiento de los graves hechos que ha correspondido investigar a la comisión debería estar, en condiciones normales, el de la sanción que merecen los responsables de los mismos" (S/25500, anexo, pág. 189).

Sin embargo, el informe agregó:

"La cuestión que se plantea no es si se debe o no sancionar a los culpables sino si se puede o no hacer justicia. La sanción a los responsables de los crímenes descritos es un imperativo de la moral pública. Sin embargo, no existe una administración de justicia que reúna los requisitos mínimos de objetividad e imparcialidad para impartirla de manera confiable. Esta es una parte de la realidad actual del país, cuya

/...

urgente superación debe ser objetivo de primer orden de la sociedad salvadoreña.

No cree la Comisión que pueda encontrarse una respuesta fiable a los problemas que ha examinado, reintroduciéndolos en lo que es una de sus causas más relevantes. El cuadro que presenta este informe no se habría configurado si el sistema judicial hubiera funcionado adecuadamente ... Siendo ese el contexto presente, es claro que en este momento la Comisión sólo confía en una administración judicial renovada a la luz de los Acuerdos de Paz, para que sea ella la que aplique cumplida y oportuna justicia" (ibíd., pág. 190).

Debe entonces destacarse que la omisión de procesos judiciales y de sanciones que siguió al informe de la Comisión no era parte de la esencia de ésta. Por el contrario, su mandato contemplaba que se podrían recomendar medidas legales y, por lo tanto, someter a los responsables a la acción de la justicia. Fue el informe de la Comisión y no sus términos de referencia lo que determinó que tales procesos no eran viables. No hay lugar, en consecuencia, a la afirmación según la cual la Comisión de la Verdad de El Salvador era, a priori, un dispositivo para esclarecer los hechos sin juzgar a los culpables;

e) Un compromiso de las partes firmantes del acuerdo de cumplir con las recomendaciones de la Comisión;

f) La verificación internacional del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión.

26. Varios de estos componentes están presentes en la comisión que pudiera establecerse en Burundi: a) una comisión internacional; b) una averiguación sobre hechos de violencia que sirvió para esclarecerlos e identificar a sus autores, instigadores o encubridores; c) un mandato que otorgó competencia a la Comisión para hacer las recomendaciones que puedan colegirse de los resultados de la averiguación; d) la verificación internacional.

27. Sin embargo, pueden observarse también puntos de divergencia. No existe todavía un acuerdo político en Burundi sobre los términos de referencia de la comisión prevista en el artículo 36 del Pacto de Gobierno, lo que implica que tampoco existe un compromiso explícito de poner en práctica las conclusiones y recomendaciones de la misma. A esto debe agregarse la cuestión de la naturaleza de la investigación o averiguación, pues en Burundi se insiste en que ésta ha de ser "judicial", aunque no se haya precisado claramente qué implica tal calificación. Asimismo, en los términos en que ha sido concebida la misión prevista en el artículo 36 del Pacto de Gobierno, no basta con que ella esté facultada para hacer recomendaciones de orden legal o judicial, sino que sus trabajos deben necesariamente conducir al enjuiciamiento y sanción de los responsables. En este sentido, en Burundi no tendrían cabida las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad de El Salvador en cuanto a los procesos judiciales.

28. Vistas tales diferencias, a las que se agregan las marcadas por el contexto histórico, y teniendo presentes las reservas y resistencias antes referidas, debe concluirse que una comisión de la verdad calcada enteramente sobre el modelo salvadoreño no es viable hoy en día en Burundi.

/...

2. Una comisión judicial de averiguación internacional

29. El artículo 36 del Pacto de Gobierno contempla una "misión de investigación judicial internacional". Es la misma entidad a la cual se refiere la nota del Presidente de la República al Secretario General del 24 de enero de 1995. El mandato de dicha misión no ha sido objeto de consenso al interior del país; pero ello no es óbice a que se formulen algunas observaciones sobre el alcance y la utilidad de dicho mecanismo, conforme al sentido usual que cabría atribuirle.

30. Debe aclararse, ante todo, que no se trata de un tribunal internacional, competente para juzgar directamente delito alguno, ni siquiera en la hipótesis de que concluyera que alguno de los hechos investigados configura un delito contra la humanidad, como sería el caso del genocidio. Tampoco es una comisión investigadora que debe limitarse a establecer que determinados hechos han acaecido o no.

31. La connotación "judicial" de tal comisión indicaría que ella debe completar una averiguación sobre determinados hechos; establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de los mismos, en particular los procesos judiciales a los que habría que someter a los presuntos responsables de hechos punibles; y señalar cuáles son las actividades competentes para aplicar tales consecuencias jurídicas, que serían normalmente las autoridades de Burundi, salvo que, de haberse cometido genocidio, sea procedente constituir un tribunal internacional penal.

32. Para ese fin, la comisión debería estar facultada para recoger información de todo tipo; recibir declaraciones bajo juramento y testimonios en el sentido judicial de la expresión; practicar inspecciones en los lugares que estime necesario; y, en general, para acopiar las pruebas necesarias según las leyes de Burundi para que se procese a los presuntos responsables y se ponga cese a la impunidad.

33. Ahora bien, en la práctica, semejante mecanismo, aplicado en su sentido más estricto, presenta varios inconvenientes que desaconsejan su establecimiento en esas condiciones. Cabe señalar, en primer lugar, que una de las razones para recurrir a una comisión internacional es, precisamente, la debilidad del aparato judicial del país, que no ha logrado, en la práctica, sancionar a nadie por graves crímenes que se han cometido desde la independencia. Además, como he señalado antes en este informe, sectores importantes de la sociedad desconfían de la imparcialidad de los tribunales. El solo establecimiento de una comisión judicial de averiguación internacional no parece, de ningún modo, suficiente para cambiar ese contexto.

34. Por otra parte, la comisión debe instruir un expediente, es decir, recoger pruebas en el sentido judicial del término. No basta con su convicción moral o con el testimonio de personas cuyo anonimato deba ser guardado. Se trataría de pruebas que puedan hacerse valer ante los tribunales nacionales. Esto plantea en la práctica una grave dificultad, al menos por lo que respecta a la prueba testimonial. En el escenario actual es indispensable proteger a los testigos. Su identidad, salvo respecto de quienes expresamente manifiesten su voluntad en contrario, debe ser mantenida en secreto. Los testimonios serán difícilmente obtenibles dentro del país si no se actúa dentro de un marco de rigurosa

confidencialidad, lo que implica que no habrá testimonios públicos, ni repregunta de testigos, ni un lugar determinado para recibir los testimonios.

35. A menos que se introduzcan las reformas apropiadas en las leyes de Burundi, difícilmente puede imaginarse cómo la convicción moral de la comisión internacional, fundada sobre testimonios recogidos en semejantes condiciones, podrá tener valor probatorio ante las cortes burundianas.

36. No se trata de una dificultad necesariamente insalvable, en el plano teórico. La prueba testimonial es importante, pero no es la única que puede hacerse valer en un proceso. Hay fuentes de información preexistentes, como las que están en posesión de la Misión Preparatoria de determinación de los hechos enviada a Burundi, integrada por los embajadores Martin Huslid y Siméon Aké, o los informes y pruebas recogidas por organizaciones no gubernamentales. Además, la mayor parte de los sistemas jurídicos admite que un cúmulo de indicios graves, precisos y concordantes, aun en el caso en que alguno de ellos sea referencial, puede constituir plena prueba ante un tribunal.

37. Con todo, en la práctica, si el informe y las recomendaciones de la comisión internacional así constituida se limitan a establecer los hechos y sus consecuencias jurídicas, es previsible que los tribunales de Burundi concluyan que los trabajos de dicha comisión no son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de la que, a todo evento, gozarán los inculpadados. Se estaría así ante el peligrosísimo supuesto de que los trabajos de la comisión sirvieran para esclarecer los crímenes sometidos a su investigación, pero que la justicia burundiana no castigase a los criminales o los castigase siguiendo criterios que pudieran percibirse como discriminatorios.

38. En consecuencia, una comisión judicial de averiguación internacional, cuyo mandato esté limitado a extraer consecuencias de orden puramente legal, no es aconsejable ni viable, en la situación actual de Burundi, como un mecanismo efectivo para poner cese a la impunidad.

39. En cambio, ella podría ser un mecanismo viable y útil, si las atribuciones y el contenido del mandato de la comisión incluyen, además, la facultad de hacer recomendaciones institucionales y si se puede obtener un grado razonable de garantía de las autoridades nacionales de poner en práctica dichas recomendaciones. Es necesario adaptar el contenido del mandato de una comisión judicial de averiguación judicial a las particularidades que ofrece la actual situación de Burundi para agregar medios de garantía de que las conclusiones y recomendaciones de tal comisión serán efectivamente cumplidas. Los términos de referencia a los que se hará mención en la sección II del presente informe incluyen sugerencias en ese sentido. Sin embargo, antes de pasar a examinar ese tema, es necesario abordar el tercer dilema: la constitución de la comisión.

C. El tercer dilema: el procedimiento para establecer la comisión

40. Como ya se ha dicho varias veces, aunque el Pacto de Gobierno previó la constitución de una misión judicial de averiguación internacional, no definió su mandato. Para alcanzar ese objetivo, es posible imaginar dos opciones, a saber,

/...

un acuerdo entre los firmantes del mismo Pacto de Gobierno, o una resolución del Consejo de Seguridad.

a) La comisión - acuerdo

41. La fijación del mandato de la comisión a través de un acuerdo nacional ofrece, sin duda, varias ventajas, tanto por el respaldo político que la comisión tendría, aun antes de haber sido establecida, como por la posibilidad de obtener, desde el comienzo mismo de su gestión, el compromiso de cumplir con las recomendaciones de todo orden que ella formule.

42. Se trata, sin embargo, de un acuerdo que puede ser difícil obtener a corto plazo. El Presidente de la República nombró una comisión técnica para alcanzar esa meta. Se me informó en el terreno de que las perspectivas de tal acuerdo eran razonablemente optimistas. No estoy completamente seguro de que las bases de ese optimismo sean sólidas y pienso que las negociaciones pueden tomar un buen tiempo. Por otra parte, tampoco es seguro que el mandato que eventualmente resultase de ese acuerdo se adapte a las condiciones en que las Naciones Unidas estarían dispuestas a comprometerse en dicho proceso, lo cual abriría un nuevo compás de espera, antes de que la comisión llegue a instalarse.

43. Una de las razones invocadas en este informe para concluir que el establecimiento de la comisión, dentro de un marco adecuado, parece útil, necesario y hasta urgente radica en que la misma es un medio apropiado del cual podrían disponer los sectores moderados para intentar contener a los extremistas. En consecuencia, si la definición de su mandato se ve condicionada al resultado de un proceso de negociaciones arduo, prolongado e incierto, la utilidad de la comisión misma perdería parte de su sentido. ¿Cabría entonces establecerla a través de un procedimiento distinto a un acuerdo?

b) La comisión - resolución del Consejo de Seguridad

44. La comisión puede ser establecida por una resolución del Consejo de Seguridad. Una comisión judicial de averiguación internacional ha sido sugerida en el informe, de fecha 20 de mayo de 1994 (S/1995/157, anexo, párr. 164). La misma propuesta emana del informe de la Misión del Consejo de Seguridad en Burundi del 28 de febrero de 1995 (S/1995/163, anexo, párr. 21). También el Presidente del Consejo de Seguridad, en su alocución del 9 de marzo de 1995, subrayó la función que puede cumplir semejante comisión en la investigación de la tentativa de golpe de estado del 21 de octubre de 1993 y de las masacres que lo siguieron (véase S/PRST/1995/10).

45. Por otra parte, todos los informes que se han elaborado en relación con los actos de violencia que se han desatado en el país desde entonces, indican que se han cometido graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos y que se ha infringido el derecho internacional. Asimismo, el Pacto de Gobierno del 10 de septiembre de 1994 alude repetidamente a la posibilidad de que se haya configurado un caso de genocidio (véase A/50/94-S/1995/190, artículos 10, 24, 29, 36 y 40).

46. Además, según el ya varias aludido artículo 36 del Pacto de Gobierno, se trata de una solicitud que emana del país mismo. Dicho Pacto fue firmado por el Representante Especial del Secretario General, como observador internacional.

/...

Por último, su artículo 54 dispone que el Secretario General es depositario de la misma.

47. Existe, pues el marco formal apropiado para una iniciativa de ese género por parte del Consejo de Seguridad, lo cual tendría la indiscutible ventaja de avanzar más rápidamente en el camino de la creación y el efectivo establecimiento de la comisión judicial de averiguación internacional. Sin embargo, deben tomarse las precauciones adecuadas para asegurar la cooperación de las autoridades nacionales, cooperación que es indispensable para que la comisión actúe dentro de un marco apropiado y sea un instrumento verdaderamente útil para erradicar la impunidad de Burundi.

III. MANDATO DE LA COMISIÓN

48. Las consideraciones que ya se han formulado indican que, en determinadas condiciones, es viable el establecimiento de la comisión judicial de averiguación internacional en Burundi. Esas mismas consideraciones sustentan los términos de referencia que se ordenarán a continuación. El objetivo es el de establecer una comisión internacional imparcial, que tendrá la misión de investigar y esclarecer hechos y recomendar las medidas judiciales e institucionales que se infieran de sus hallazgos y que sirvan para erradicar la impunidad, las cuales deberán ser adoptadas bajo la verificación de las Naciones Unidas. Su composición, su mandato y la atención prestada al resultado de sus trabajos deben concebirse de modo que la comisión cumpla con dos cometidos esenciales, sin los cuales carecería de utilidad y de sentido. Ella debe ser, en primer término, una comisión internacional para la averiguación de los graves hechos de violaciones ocurridos en Burundi desde la tentativa de golpe de estado del 21 de octubre de 1993; pero ella ha de ser también, una comisión contra la impunidad.

A. Una comisión de averiguación

1. Composición y designación de la comisión

49. Se establecerá una comisión internacional neutra e imparcial. Debe estar integrada por juristas cuya integridad, imparcialidad y objetividad estén más allá de toda duda. Su designación será hecha por el Secretario General de las Naciones Unidas. Por razones de carácter práctico, el número de sus miembros no debería exceder de tres.

2. Los hechos objeto de averiguación

50. Según el artículo 36 del Pacto de Gobierno, la comisión estaría llamada a investigar sobre tres tipos de sucesos: a) el putsch del 21 de octubre de 1993; b) los eventos que los signatarios del Pacto de Gobierno han convenido en llamar genocidio, sin perjuicio de los resultados de las averiguaciones nacionales e internacionales independientes; y c) los diferentes crímenes con connotación política cometidos desde octubre de 1993. Los dos primeros casos no suscitan especiales dudas: se trata de los sucesos del 21 de octubre de 1993 y de las masacres que tuvieron lugar a continuación. El tercero merece, en cambio,

/...

algunas observaciones. Primero, es difícil definir con precisión, en el contexto de Burundi, qué es un crimen con connotación política, como no sea descartando del objeto de la averiguación aquellos casos de delitos que, notoriamente, deban ser considerados como "comunes". En segundo lugar, debe tenerse presente que el Pacto de Gobierno fue firmado en septiembre de 1994 y que el artículo 36 previó que la "misión internacional" se constituiría dentro de los 30 días siguientes. Ese no ha sido el caso y los hechos de violencia han continuado, sin interrupción, y han comportado nuevas y graves lesiones y amenazas a los derechos humanos. Sería inadmisible e insostenible que el artículo 36 del Pacto de Gobierno fuera interpretado restrictivamente y se pretendiera que un acuerdo político impediría a la comisión investigar y esclarecer tales hechos de violencia, cualquiera sea su "connotación". Sería conveniente, en ese sentido, que el mandato de la comisión expresamente mencionara que la averiguación se extiende a "todos los actos graves de violencia y los diferentes crímenes con connotación política cometidos desde octubre de 1993".

3. Propósito de la averiguación

51. Esclarecer los hechos antes señalados, identificar a los presuntos responsables de los mismos y acopiar las pruebas que sean necesarias para el enjuiciamiento y la punición de éstos - este enunciado requiere, a su vez, ciertas precisiones.

52. En cuanto a los hechos, es notorio que ha habido numerosos actos de violencia y que es extremadamente difícil, si no imposible, esclarecerlos todos. La comisión deberá centrar su atención en los hechos más importantes, por su gravedad, sus características, su trascendencia histórica o la conmoción social que hayan ocasionado.

53. En cuanto a la identificación de los presuntos responsables, es también notorio que se plantea un problema de magnitud y de grados diferentes de responsabilidad. La averiguación debe apuntar hacia aquellos que tienen el mayor grado de culpabilidad en la organización, planificación, instigación o ejecución de los hechos investigados por la comisión.

54. En cuanto al acopio de pruebas, la comisión podrá valerse de todo género de pruebas. En lo que se refiere a los testimonios, aun a riesgo de que ello incida negativamente sobre el valor final de la prueba, la comisión deberá, en cada caso, tomar las medidas apropiadas para la protección y seguridad de los testigos.

4. Organización de sus trabajos

55. La comisión debe estar plenamente facultada para organizar libremente sus trabajos, los cuales se ejecutarán en todo momento sobre una base de estricta confidencialidad. Deberá contar con un personal idóneo, con el apoyo de la comunidad internacional.

5. Poderes

56. A los fines de la averiguación que debe concluir, la comisión debe estar dotada de amplios poderes, tales como:

a) Acopiar, por los medios que estime adecuados, toda información que considere pertinente. La comisión tendrá plena libertad para utilizar las fuentes de información que estime útiles y confiables, dentro y fuera del país;

b) Requerir informes, antecedentes, documentos o cualquier otra información útil para el cumplimiento de su misión, a las autoridades y servicios del Estado que se encuentren en posesión de los mismos; y tener acceso a cualquier archivo oficial;

c) Entrevistar, libre y privadamente, a cualesquiera personas, grupos e integrantes de entidades o instituciones.

d) Gozar de plena libertad de movimiento dentro del país y visitar libremente cualquier establecimiento o lugar sin previo aviso;

e) Practicar cualquier otra diligencia o indagación que estime útil para el cumplimiento de su mandato.

B. Una comisión contra la impunidad

57. No debe perderse de vista, en ningún momento, que la necesidad de esta comisión radica en el cuadro de impunidad imperante en Burundi. Su función, por lo tanto, no quedará satisfecha con la mera presentación de un informe donde se esclarezcan escrupulosamente los hechos investigados y se identifique a los presuntos responsables. Es necesario, además que esté facultada para hacer recomendaciones con el objeto de asegurarse de que éstos sean efectivamente juzgados con toda rectitud, así como para promover los cambios institucionales necesarios para erradicar la impunidad hacia el futuro. Todo ello comporta igualmente que, después de la presentación del informe, se adopten las medidas apropiadas para la verificación internacional del cumplimiento de las recomendaciones de la comisión.

1. Informes de la comisión

58. La comisión podrá presentar informes preliminares al Secretario General cuando lo estime necesario para el progreso de sus trabajos o cuando decida hacer recomendaciones previas a la presentación de su informe final. También podrá hacerlo cuando considere conveniente referirse a la cooperación que recibe de las autoridades de Burundi y de los signatarios del Pacto de Gobierno, para la ejecución de su trabajo y la adopción de sus recomendaciones.

59. El informe final de la comisión deberá contener: a) una relación de los hechos investigados, con sus conclusiones y los fundamentos y pruebas que las sustentan; b) la calificación de los delitos que se hayan cometido, particularmente si se ha incurrido en genocidio o en otros delitos contra la humanidad y si, en consecuencia, es procedente juzgar a los presuntos responsables ante un tribunal internacional; c) la identificación de los responsables de los demás crímenes a los cuales ha estado referida la

averiguación y las recomendaciones que estime apropiadas para asegurarse de su enjuiciamiento; d) las recomendaciones y las disposiciones de orden legal, político o administrativo que se infieran de sus hallazgos y conclusiones, las cuales deberán incluir medidas destinadas a prevenir la repetición de tales hechos y, en general, a erradicar la impunidad de Burundi.

60. El informe final será remitido al Presidente de la República y al Secretario General de las Naciones Unidas, quien lo hará de conocimiento público y adoptará las decisiones o iniciativas que estime pertinentes. También se remitirá un ejemplar al Procurador General de la República.

2. Las recomendaciones de la comisión

61. Además de las recomendaciones contenidas en su informe final, la comisión debe estar facultada para formular recomendaciones aun antes de la presentación de ese informe. Es necesario que la comisión esté en condiciones de asegurar, hasta donde sea posible, que las conclusiones de su informe final produzcan un resultado efectivo. Los trabajos de la comisión deben sincronizarse con las reformas institucionales internas necesarias para que los juicios tengan efectivamente lugar y se respeten estrictamente las reglas del debido proceso legal. Esto indica que la comisión debe disponer de cierta flexibilidad respecto de los plazos y fechas para la presentación de su informe final. Más aún, debería dejarse abierta la posibilidad de que la comisión condicionara la consignación de dicho informe al cumplimiento de tales recomendaciones previas. En todo caso, antes de establecer la comisión es necesario obtener el compromiso de las autoridades pertinentes de que todas las recomendaciones de la comisión serán escrupulosamente observadas.

3. La verificación internacional por las Naciones Unidas

62. El Secretario General adoptará las medidas de verificación que estime necesarias para asegurarse de que las conclusiones y recomendaciones de la comisión sean respetadas y ejecutadas. Esas medidas podrán incluir la presencia de expertos observadores internacionales para que sigan de cerca los procesos en curso ante los tribunales nacionales y, en su caso, para prestar a éstos el apoyo y la asistencia que sean requeridos. El Secretario General mantendrá informado al Consejo de Seguridad.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

63. Una comisión de la verdad calcada enteramente sobre el modelo salvadoreño no parece viable actualmente en Burundi. Asimismo, una comisión judicial de averiguación internacional, cuyo mandato esté limitado a extraer consecuencias de orden puramente legal, no es aconsejable ni viable, en la situación actual del país, como un mecanismo efectivo para poner cese a la impunidad.

64. Sin embargo, si su mandato reúne las condiciones apropiadas, el establecimiento de una comisión judicial de averiguación internacional en Burundi puede ser útil y necesario para el efectivo combate contra la impunidad que ha prevalecido en ese país y particularmente para el enjuiciamiento y la

/...

sanción de los responsables de la tentativa de golpe de estado y el asesinato del Presidente Melchior Ndadaye y varios de sus colaboradores, el 21 de octubre de 1993, de las masacres que se desencadenaron inmediatamente después y de los actos graves de violencia y los diferentes crímenes con connotación política cometidos desde octubre de 1993. Puede ser además una contribución de la comunidad internacional para que se despierten esperanzas en la erradicación de la impunidad en el porvenir y para la pacificación del país.

65. La viabilidad y utilidad de esa comisión están condicionadas a que su mandato incluya poderes para asegurar que sus conclusiones y recomendaciones serán efectivamente ejecutadas y que sus trabajos alcanzarán realmente los objetivos definidos en el párrafo anterior. Esto comporta que ella debe estar facultada para hacer recomendaciones de carácter institucional, sean de orden legal, político o administrativo, tanto dentro de su informe final como incluso antes de concluirlo y presentarlo.

66. Para que ese objetivo pueda ser alcanzado, es necesaria la cooperación de las autoridades pertinentes de Burundi. Esa cooperación debe incluir el compromiso explícito de poner en práctica las recomendaciones de la comisión.

67. La comisión puede ser establecida por resolución del Consejo de Seguridad sobre la base, en primer lugar, de las iniciativas ya adoptadas por las Naciones Unidas que recomiendan la creación de dicha entidad; en segundo lugar, de toda la información disponible que indica que se han cometido graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos y que se ha infringido el derecho internacional; y, en tercer lugar, del artículo 36 del Pacto de Gobierno, que expresamente solicita que se recurra a tal comisión.

68. El cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones de la comisión debería estar sujeto a la verificación de las Naciones Unidas, a través de todas las medidas necesarias para ese fin, las cuales podrían incluir la presencia de expertos observadores internacionales para que sigan de cerca los procesos en curso ante los tribunales nacionales y, en su caso, para prestar a éstos el apoyo y la asistencia que sea requerida.

APÉNDICE

Durante mi estadía en Bujumbura, tuve la oportunidad de entrevistarme con las siguientes personas:

Personalidades públicas

Excmo. Sr. NTIBANTUNGANYA, Sylvestre, Presidente de la República

Excmo. Sr. NDUWAYO, Antoine, Primer Ministro

BANSUBIYEKO, Mamès, Jefe de Gabinete del Presidente de la República

BARIBWEGURE, Janvier, Auditor Militar, Teniente Coronel

BUTASI, Jean-Bosco, Procurador General de la República

BUYOYA, Pierre, ex Presidente de la República

DARADANGWE, Jean-Bosco, Director General de Asuntos Sociales y de la Comunicación en el Seno del Ministerio de Defensa Nacional, Teniente Coronel

FYIROKO, Gédéon, Jefe del Gabinete Militar del Presidente de la República, Coronel

KANYENKIKO, Anatole, ex Primer Ministro

MUJAWAHA, Marcienne, Ministra de Derechos Humanos, Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer

NAHAYO, Diomède, Presidente de la Corte Suprema

NAHINDAVYI-NDANGA, Alphonse, Secretario General de la Asamblea Nacional, con NDORICIMPA, Rogatien, NDIKUMANA, Innocent, NDIKUMANA, Nephtalie, y BAMVUGINYUMVIRA, Frédéric, parlamentarios del Frente para la Democracia en Burundi (FRODEBU)

NDABITOREYE, Audifax, Director de documentación

NDIKUMASABO, Vincent, Presidente del Partido Socialista Demócrata (PSD) y Ministro de Administración Pública

NDORICIMPA, Léonidas, Vicepresidente de la Unión para el Progreso Nacional (UPRONA)

NGENDAKUMANA, Léonce, Presidente de la Asamblea Nacional

NGENZEBUHORU, Frédéric, Presidente del Grupo Parlamentario del partido UPRONA, con NDIKUMANA, Victoire, KADEGE, Alphonse Marie, y SIBOMANA, Adrien, miembros parlamentarios del partido UPRONA

NTAHOBAMA, Melchior, Ministro de Justicia y Fiscal General de la República

/...

NTAMWANA, Mons. Simon, obispo católico de Bujumbura

RUGAMBARARA, Alphonse, Presidente del partido INKINZO y Ministro de Asuntos de la Juventud, Deportes y Cultura

SINARINZI, Gabriel, Ministro del Interior y Seguridad Pública

Cuerpo diplomático

Bélgica

Estados Unidos de América

Francia

República Federal de Alemania
